

**NUE ACUM 355-A-2016 (CO)**

**Aguilar Pereira y Vega Cruz contra la Corte Suprema de Justicia**  
**Resolución Definitiva**

**INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP):** San Salvador,  
a las diez horas con veinticinco minutos del quince de enero de dos mil dieciocho.

**1. Descripción del caso:**

**Herbert Danilo Vega Cruz** apeló en contra de la resolución emitida por el Oficial de Información de la **Corte Suprema de Justicia (CSJ)**, en la que denegó la información sobre “Copia certificada de declaración jurada patrimonio de toma de posesión y cesación de cargo, así como las auditorias del Juez Roberto Carlos Calderón Escobar, como: Juez de Paz de Nahuizalco, periodo: 2003-2005; Juez 2º de Paz de Ahuachapán, periodo: 2005-2006; Juez 12º de Paz de San Salvador, periodo: 2007-2012; Juez 1º de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Salvador, periodo: 2012-2016; Juez 10º de Instrucción de San Salvador, periodo: 1 de octubre de 2016”.

El Oficial de Información, entregó versión de cese de cargo como juez 12º de paz de San Salvador, versión publica de declaración de patrimonio de toma de posesión como Juez 1º de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Salvador. En cuanto a las restantes declaraciones juradas de patrimonio requeridas como: Juez de Paz de Nahuizalco, periodo: 2003-2005; Juez 2º de Paz de Ahuachapán, periodo: 2005-2006; Juez 10º de Instrucción de San Salvador, periodo: 1 de octubre de 2016; señaló que estas no se encuentran en los archivos de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, por no haberlas presentado el funcionario Roberto Carlos Calderón Escobar. Finalmente sobre las auditorias de las declaraciones juradas, argumentó que estas no se entregarían por que al momento del requerimiento no se han realizado, documentos que se entregaran una vez se hagan y se conviertan en versión pública.

Este Instituto admitió el recurso de apelación y se designó al Comisionado **Carlos Adolfo Ortega**, para instruir el procedimiento.

La **Corte Suprema de Justicia (CSJ)** rindió su informe señalando que no se ha negado el acceso a la información pública, porque el subjefe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, emitió razones y argumentos por los cuales no podía entregar la información por el momento, por lo que entregó parte de ella al peticionario en versión publica; argumentando de esta manera que la resolución emitida por el Oficial de Información está apegada a derecho, ya que en ningún momento ha vulnerado el derecho de acceso a la información pública del apelante.

Por otra parte, señaló que las auditorias de las declaraciones juradas de patrimonio presentadas, se entregaran cuando la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia las realice y las envíe a la unidad de acceso a la información pública, en un plazo razonable, debiendo tomar en cuenta la carga de trabajo, capacidad instalada y complejidad de la información.

Con respecto a que no se estableció una fecha determinada para entregar la información, argumentó que tal como se ha establecido en diversos informes remitidos por esa Unidad, la carga y complejidad del trabajo en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, ha sobrepasado la capacidad instalada, a tal punto que las autoridades de la Corte Suprema de Justicia están trabajando a fin de fortalecer tal Unidad.

La **CSJ** ofreció como prueba la copia del acuerdo de Corte Plena de: Memorándum referencia 90-2017-SP, mediante el cual se contesta nota y señala que cumpliendo indicaciones dadas en sesión de Corte Plena, las auditorias solicitadas se entregaran a la mayor brevedad posible, debido a la carga existente en la Sección de Probidad. Para lo cual adjuntó estadísticas de la carga laboral, así como de la descripción narrativa del procedimiento que llevan a cabo para la investigación de funcionarios y exfuncionarios con presunción de enriquecimiento ilícito.

## 2. Análisis del caso

El análisis jurídico del caso seguirá el orden lógico siguiente: **(I)** determinación de la naturaleza de la información solicitada; **(II)** valoración de la prueba aportada por la **Corte Suprema de Justicia**; y, **(III)** análisis en torno a la seguridad jurídica.

**I.** El acceso a la información pública es un derecho constitucional “implícito”, es decir, no regulado expresamente en la Constitución (Cn.), pero que tiene una condición indiscutible de derecho fundamental surgida del derecho a la libertad de expresión regulado en el artículo 6 de la Cn. El DAIP comprende la facultad de buscar, recibir y difundir datos, ideas o informaciones de toda índole, pública o privada, que tengan “interés público”.

Este “derecho a saber” se enmarca en el ámbito de las libertades individuales, aunque también tiene un carácter colectivo que adquiere relevancia para el fortalecimiento del estado democrático de derecho, porque su ejercicio garantiza la transparencia y permite a las personas acceder libremente a las informaciones en poder de las instituciones del Estado, como un mecanismo de control social a la gestión pública.

La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) tiene como fines, entre otros, la promoción de la participación ciudadana en el control de la gestión gubernamental y la fiscalización ciudadana al ejercicio de la función pública; promover la eficiencia de las instituciones públicas; contribuir a la prevención y combate de la corrupción; y fomentar la cultura de transparencia (Art. 3). Además, uno de sus principios es la “rendición de cuentas”, por medio del cual quienes desempeñan responsabilidades en el Estado están obligados a rendir cuentas sobre su gestión, ante el público y la autoridad competente (Art. 4 letra h.).

En línea con lo anterior, no puede considerarse aisladamente lo establecido en el Art. 240 de la Cn. sino que, ineludiblemente, conforme al criterio sistemático, debe interpretarse conjuntamente con otras disposiciones del cuerpo normativo en el que está inserto; por lo tanto, es necesario determinar el sentido del referido artículo en relación con el Art. 6 inciso 1° de la Cn., que reconoce la libertad de información, que consiste en el

derecho a investigar o buscar y a recibir informaciones de toda índole, pública o privada, que tengan interés público.

La libertad de información se manifiesta a través de dos derechos: el derecho a comunicar libremente la información veraz por cualquier medio de difusión; y, el derecho de acceso a la información pública, el cual implica el libre acceso, por parte de las personas, a las fuentes que contienen datos de relevancia pública, por lo que existe protección constitucional de la búsqueda y obtención de información dado que existe un principio general de publicidad y transparencia de las actuaciones del Estado .

Y es que en razón de sus funciones, los funcionarios públicos se encuentran sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad —tal como lo establece el Art. 11 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— y “sus actuaciones salen innegablemente del dominio privado para insertarse en el dominio público, esto se asienta no en la calidad del sujeto, sino en el interés y relevancia pública de las actividades que realiza”. De este modo, el que ingresa al servicio público voluntariamente acepta las condiciones inherentes al mismo, tales como un grado disminuido de privacidad o intimidad respecto del que correspondería a un sujeto común.

En este orden de ideas, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que los funcionarios públicos son titulares del derecho a la intimidad y por ende del derecho a la propia imagen, pero la protección a estos derechos es más débil en comparación con la que se concede a los particulares. Esto es así, porque los funcionarios públicos se encuentran expuestos permanentemente al escrutinio público sobre las actividades que realizan en el ejercicio de su función, las cuales son de interés público; y, se insertan constantemente en el debate, como mecanismo de control ciudadano frente al poder.

Por otra parte, la jurisprudencia constitucional ha manifestado que el carácter de derecho fundamental del acceso a la información propicia el afianzamiento de democracias transparentes y efectivas, facilita la rendición de cuentas y genera un debate público permanente, sólido e informado. Desde esta perspectiva, el acceso a la información prepara a las personas para asumir un papel activo en el gobierno, mediante la construcción de una

opinión individual y colectiva fundada sobre los asuntos públicos, lo que les permite una participación política mejor orientada, deliberante y responsable, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. En dicho sentido, este nivel de contraloría ciudadana incentiva a los gobiernos a utilizar los recursos estatales efectivamente para el bien colectivo y reduce los espacios para la corrupción.

Es así que la transparencia, consagrado –además– como un principio de la ética pública que rige las actuaciones de los servidores públicos (Art. 4 letra f) de la Ley de Ética Gubernamental), según las tendencias modernas, contrasta con el mantenimiento en secreto de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, ya que obliga a la fiscalización de la actividad del servicio público y con ello a cumplir con el objetivo de prevenir o detectar actos de corrupción, especialmente casos de enriquecimiento ilícito.

En definitiva, **mediante la publicidad de la declaración patrimonial y consecuentemente con el examen que la CSJ realiza de estas**, se fomenta el principio ético de la transparencia, sirve como mecanismo de combate a la corrupción y construcción de confianza ciudadana, y es un elemento fundamental para la rendición de cuentas de nuestro sistema democrático. Es decir, indudablemente la naturaleza de la información es pública. No obstante, es oportuno determinar si el ente obligado ha acreditado la imposibilidad de proporcionar la información.

**II.** En este apartado se valorará la prueba documental aportada por la **CSJ**, la cual consiste en: Copia del acuerdo de Corte Plena de: Memorándum referencia 90-2017-SP, mediante el cual se contesta nota y señala que: Cumpliendo indicaciones dadas en sesión de Corte Plena, las auditorías solicitadas se entregaron a la mayor brevedad posible, debido a la carga existente en la Sección de Probidad. Para lo cual adjuntan estadísticas de la carga laboral, así como de la descripción narrativa del procedimiento que llevan a cabo para la investigación de funcionarios y exfuncionarios con presunción de enriquecimiento ilícito.

Este Instituto considera que con la documentación aportada no se ha acreditado la inexistencia de la información requerida por el señor **Vega Cruz**, puesto que no constan las diligencias de búsqueda realizadas por el ente obligado; razón por la que es oportuno

solicitar las diligencias de búsqueda de dicha información o en su defecto emitir la declaratoria de inexistencia de información con base al Artículo 73 de la LAIP.

Por otra parte, acreditaron la existencia de criterios por parte de la **CSJ** para priorizar a los funcionarios públicos a los que se les realizará el examen de auditoría de las declaraciones patrimoniales.

Asimismo, se determinó el incremento de trabajo por parte de la Sección de Probidad, la capacidad humana instalada y las dificultades que poseen para realizar las auditorías de las declaraciones de patrimonio en tiempos expeditos. Este Instituto advierte la necesidad de hacer conciencia al Pleno de la Corte de la urgencia de contar con personal adecuado y destinar una asignación presupuestaria idónea a fin de realizar las auditorías, que como ya se dijo permiten fortalecer la lucha contra la corrupción.

**III.** No obstante, este Instituto considera que para el caso en comento no existe certeza de la fecha en la que se estima contar con la información solicitada. Por ello, se realizan las siguientes consideraciones.

El no contar con la certeza del plazo en el que se podrá contar con la información es una violación manifiesta a la seguridad jurídica. Este Instituto retoma jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional que se ha expresado sobre la seguridad jurídica, en el sentido de enfatizar que además de ser un derecho, se constituye en uno de los principios o ideas rectoras de la actividad del Estado, y que impone el deber insoslayable de respetar y asegurar la inviolabilidad de los derechos constitucionales, delimitando de esa manera, las facultades y deberes de los poderes públicos<sup>1</sup>.

Al respecto, ese tribunal ha expresado su posición en reiteradas resoluciones sosteniendo que seguridad jurídica es la certeza que el particular posee en cuanto a que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares y autoridades competentes, ambos establecidos previamente. En este sentido, se advierte que el no contar con una fecha establecida, hace que el derecho de acceso a la información quede supeditado

---

<sup>1</sup> Sala de lo Constitucional. Amp. 673-2008 de fecha 17/11/2010

a la discreción de la Sección de Probidad, lo cual representara una violación a su derecho de información.

Por otra parte, esa honorable Sala ha señalado que existen diversas manifestaciones de la seguridad jurídica, una de ellas es justamente **la prohibición de la arbitrariedad del poder público** y más precisamente de los funcionarios que lo ejercen; aquéllos se encuentran obligados a respetar los límites que la ley prevé de manera permisiva para ellos, al momento de realizar una actividad en el ejercicio de sus funciones. Un funcionario administrativo, está obligado a respetar la ley y sobre todo la Constitución en los procedimientos que deba seguir, ya que sus límites de actuación están determinados por una y otra. Obviar el cumplimiento de una norma o desviar su significado ocasiona de manera directa violación a la Constitución, y con propiedad, a la seguridad jurídica<sup>2</sup>.

Y es que, el hecho de dejar a discreción el plazo de cumplimiento generaría la posibilidad de arbitrariedad en la asignación de funcionarios a los que se les seguirá la auditoría; por otra parte, ya ha quedado de manifiesto el interés del solicitante en conocer el resultado de los exámenes de los funcionarios públicos señalados *supra*.

En consecuencia, este Instituto, en aras de garantizar el derecho de acceso a la información pública, considera oportuno ordenar la elaboración de un plan por parte de la Sección de Probidad en el que se detallen los plazos en los que se practicará la auditoría del funcionario público requerido por el señor **Vega Cruz**. Este plan deberá contener los objetivos; estrategias; plantear las tareas con tiempos específicos fechas de inicio y finalización. Lo anterior para brindar seguridad jurídica de que efectivamente se realizará la auditoría de las declaraciones de patrimonio de los servidores públicos del caso en comento.

Para la elaboración de este plan, el ente contará con un plazo de treinta días hábiles. Asimismo, dentro de ese plan se deberá hacer mención y aplicación de los criterios que han sido adoptados por la Corte en Pleno. Un vez que el ente haya elaborado el Plan deberá remitir copia a este Instituto.

---

<sup>2</sup> Sala de lo Constitucional. Amp. 357-2008 de fecha 10/11/2010

#### 4. Decisión del caso

**Por tanto**, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, y con los Arts. 6 y 18 de la Cn., 94, 96 letra “b” y 102 de la LAIP, este Instituto **resuelve**:

**a) Ordenar** a la **CSJ** que, realice gestiones de búsqueda de información referente a declaración jurada de patrimonio, de toma y cese de cargo del Juez Roberto Calderón Escobar, como Juez de Paz de Nahuizalco, periodo: 2003-2005; Juez 2º de Paz de Ahuachapán, periodo: 2005-2006; Juez 10º de Instrucción de San Salvador, periodo: 1 de octubre de 2016; y en su defecto declare la inexistencia de información referente a declaración jurada, en el plazo de 5 días hábiles contados a partir de la fecha de esta notificación, con base al Artículo 73 de la LAIP.

**b) Ordenar** a la **CSJ** que, por medio de la Sección de Probidad elabore un Plan en el que se establezcan los plazos en los que se practicarán las auditorías de las declaraciones patrimoniales del Juez Roberto Carlos Calderón Escobar, como: Juez de Paz de Nahuizalco, periodo: 2003-2005; Juez 2º de Paz de Ahuachapán, periodo: 2005-2006; Juez 10º de Instrucción de San Salvador, periodo: 1 de octubre de 2016. Para cumplir con la obligación de la elaboración del Plan se le otorga un **plazo de treinta días hábiles** contados a partir de la notificación de la presente resolución.

**c) Ordenar** a la **CSJ** que, por medio de su Oficial de Información, se entregue al ciudadano **Herbert Danilo Vega Cruz** copia del Plan elaborado para dar certeza de los plazos en los que se obtendrán resultados de las auditorías de patrimonio, asimismo, se ordena la entrega de las auditorías en el plazo que se establezca en dicho documento.

**d) Requerir** al titular de la **CSJ** que en el plazo **de veinticuatro horas**, luego de fenecidos los plazos señalados en los párrafos anteriores, remita a este Instituto los informes de cumplimiento de la presente resolución. Estos informes también podrán ser remitidos vía electrónica a la dirección [fiscalizacion@iaip.gob.sv](mailto:fiscalizacion@iaip.gob.sv).

**e) Remitir** el presente procedimiento a la Unidad de Fiscalización para que verifique el cumplimiento de la misma.



**f) Publíquese** esta resolución, oportunamente.

**Notifíquese.-**

C.H.SEGOVIA----- ILEGIBLE-----ILEGIBLE-----ILEGIBLE-----  
 ---PRONUNCIADA POR LA COMISIONADA Y LOS COMISIONADOS QUE LA  
 SUSCRIBEN"''' RUBRICADAS'''